



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

11803/2024ASOCIACION DE BANCOS ARGENTINOS- ADEBA
Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA s/ACCION
DECLARATIVA DE CERTEZA

Quilmes, (fechado digitalmente en sistema Lex100 PJJN).- FT

Proveyendo escritos presentados ante el SGJ por el Dr. Pértica, el día 27/06/2024, a las 18:03 y 18:04 hs., titulados: “DOCUMENTAL FISCAL”, “CONTESTACIÓN DEMANDA: CONTESTA INFORME”, “CONTESTACIÓN DEMANDA: PODER GENERAL JUDICIAL”, “CONTESTACIÓN DEMANDA: DOCUMENTAL IMPOSITIVA”, por medio de los cuales se presenta en representación de su mandante –Municipalidad de Avellaneda- y presenta el informe previsto por el art. 4 de la ley 26.854. Plantea incompetencia y se opone a la citación del Estado Nacional.

AUTOS Y VISTOS:

Este expediente **FLP 11803/2024** caratulado **“ASOCIACIÓN DE BANCOS ARGENTINOS – ADEBA y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA s/ ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA”** del Registro de la Secretaría Civil n° 5 de este Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes.

Y CONSIDERANDO:

I.- Que las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de la acción declarativa de certeza impulsada por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Banco Macro S.a., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Comafi S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A., y Banco Piano S.A., con el objeto de requerir se declare la inconstitucionalidad del artículo 183 de la Ordenanza Fiscal de la Municipalidad



#38988939#417855053#20240701111544345

de Avellaneda para el ejercicio 2024, en virtud del cual se dispuso que los resultados de las operaciones sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación se encuentran gravados por la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.

Según señala la Municipalidad carece de facultades para afectar tributariamente ese tipo de operaciones. Agrega que la medida atacada afecta las prerrogativas relativas al endeudamiento público, la política económica nacional y el principio de inmunidad fiscal de los instrumentos de gobierno nacionales (artículos 4 y 75 incisos 4 y 7 de la Constitución Nacional).

II. Corrida la vista a la Fiscalía Federal de Quilmes, dictaminó a favor de la competencia de este juzgado para entender en las presentes actuaciones, por lo que compartiendo los fundamentos allí expuestos, corresponde pronunciarse por la competencia y dar curso a la acción.

III. Del informe fue evacuado por el Estado Nacional, resulta que el eventual dictado de una medida cautelar como la impetrada en autos produciría una clara afectación del interés público comprometido.

Al respecto, destacó que en el caso de autos la demandada afecta los instrumentos financieros emitidos por el BCRA, interviene en su política monetaria y viola el bloque del derecho federal.

IV.- Por su parte, el Municipio de Avellaneda, sostiene su potestad tributaria, señalando que no hay conflicto con las facultades federales ya que lo que se grava con la tasa impugnada es el resultado de las operaciones financieras detalladas en la demanda, sin entrometerse en los instrumentos creados por el Estado Nacional. Afirma el compromiso del interés público en el caso.

V.- Sentado ello, atento a las razones esgrimidas, la documentación acompañada y el peligro invocado por encontrarse conculcado en forma directa e inmediata el derecho educar y ser educado, corresponde examinar





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

si en los autos están reunidos los requisitos necesarios para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, estos son: la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de un daño irreparable (artículo 230, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Si bien el proceso cautelar se satisface con una "sumario cognitio", como señaló Chiovenda, porque es propio de su naturaleza la verosimilitud y no la certeza, no es menos cierto que, además de las circunstancias del caso, debe mediar una solicitud seria que haga suponer *prima facie* la existencia de un derecho garantizado legalmente y un interés jurídico que justifique el dictado de la medida cautelar de que se trate (*periculum in mora*).

En este mismo sentido, se ha sostenido que es la esencia de estos institutos procesales de orden excepcional, enfocar sus proyecciones sobre el fondo mismo de la controversia ya sea para impedir el acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de perjuicios que se podrían producir en caso de inactividad del magistrado y podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva (Fallos 320:1633).

Cabe destacar que, en el caso, y sin ingresar en consideraciones propias del examen sustancial de la cuestión, a través de las manifestaciones vertidas en el escrito de inicio y la documentación acompañada no se encuentra acreditada *prima facie* la verosimilitud del derecho invocado, requisito que la ley exige como presupuesto legal para la procedencia de la medida cautelar solicitada por los amparistas.

Así, de los elementos aportados en la demanda no surge con claridad la ilegalidad en que se fundamenta la acción. De tal modo, no se configura la acreditación del "*fumus bonis iuris*" que la ley exige como requisito



"sine qua non" para la procedencia de la cautelar peticionada; ello sin perjuicio de lo que pueda resolverse luego sobre el fondo del asunto, conforme las pruebas que se produzcan en autos.

Debe tenerse en cuenta que en caso de hacerse lugar a la medida cautelar solicitada con el alcance intentado, lograrían los peticionantes el cumplimiento de su pretensión, "...alterando de un modo inaceptablemente prematuro la situación existente al presente y desvirtuando en esa forma el instituto cautelar, por cuanto el objeto de la medida se confundiría con el hipotético resultado correspondiente al pronunciamiento a determinar mediante la sentencia definitiva..." (Sala III, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de Capital Federal, causa 7289, del 3/11/92).

Corresponde destacar que, dentro de las medidas precautorias, la innovativa es una decisión excepcional, porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, ya que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (conf. C.S.J.N. sent. Del 24/08/093. "Bulascio Malmierca Juan C. y otros c/ Banco de la Nación Argentina").

Sumado a ello, es dable recordar que para la procedencia de medidas cautelares como las solicitadas por la parte actora deben concurrir simultáneamente los siguientes requisitos -ley 12.008 pcia. Bs. As.-: a) Invocación de un derecho verosímil, b) Posibilidad de perjuicio inminente, alteración o agravamiento de una determinada situación de hecho o derecho, c) la no afectación de un interés público; cuestiones que, desde la integralidad de requisitos exigidos, los actores no han justificado con elementos probatorios de suficiente fuerza cognitiva para que su pretensión cautelar prospere.

Cabe recordar al respecto, que la Administración goza de la presunción de legalidad en sus actos, lo que sustenta la existencia misma del





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

Estado Constitucional de Derecho, por lo que desacreditar tal presunción es una carga procesal de fuerte trascendencia recaída sobre el actor, no apreciada en autos.

En ese sentido, y refiriéndose a una obra pública, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo ocasión de pronunciarse al respecto diciendo: “... cabe puntualizar a los efectos de apreciar el *bonis fumus juris* exigido por el art. 230, inc. 1º, que esta Corte ha establecido que la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas (Fallos 245:552 y 249:221) obliga en procesos precautorios que, como el presente, son de un limitado conocimiento, a una severa apreciación de las circunstancias del caso y a una actuación con suma prudencia por parte de esta Corte que, sin resignar su función de custodio de la Constitución, evite que medidas de esta índole comprometan la actuación de los poderes públicos...”. “... De ahí que, a los requisitos ordinariamente exigibles para la admisión de toda medida cautelar, cuando se trate de una semejante a la ordenada en autos deba agregarse la acreditación del peligro irreparable en la demora y, además, la ineludible consideración del interés público (Fallos 210:48; 303:625; 307:2267)” (CSJN, “Astilleros Alianza”, Considerando 7º, Fallos 314:1202, postura sostenida por el alto tribunal en “Electrometalúrgica Andina SAIC v. EN – DGI”, Consid. 6º. E.D., 172-606).

VI. Conforme lo expuesto precedentemente, en el caso bajo exámen, los hechos narrados y la prueba acompañada no evidencian un accionar o un comportamiento manifiestamente arbitrario o ilegal de la demandada, de modo tal que el proceder descripto en la demanda, no configura, en sí mismo, el “*fumus bonis iuris*” que la ley exige como requisito indispensable para la procedencia de la medida cautelar solicitada.

En síntesis y como conclusión cabe decir que el solicitante de la medida cautelar no ha demostrado “fehacientemente las razones que la



justifiquen” (CSJN, Fallos 316:1883; 317:978; 318:2431; 319:1069, entre otros) al no encontrarse reunidos los recaudos de procedencia exigidos para este tipo de reclamo; por lo que corresponde desestimar la medida cautelar peticionada.

Por todo lo expuesto, **RESUELVO:**

1) Tener por presentado al Dr. Marcelo Pértico, en su carácter de apoderado de la Municipalidad de Avellaneda, por denunciado el domicilio real, por constituído domicilio electrónico, el que será validado por Secretaría.

2) Desestimar la medida cautelar solicitada en este estadio procesal, sin perjuicio de lo que se resuelva en el momento del dictado de la sentencia definitiva, debiendo proseguir los autos según su estado.

3) Tramiten las presentes por la vía del proceso sumarísimo (arts. 321, 322 y ccs. del CPCCN).

4) Del escrito de inicio y la documentación adjunta, traslado a la parte demandada para que comparezca, la conteste y oponga todas las defensas de que intente valerse, dentro del plazo de cinco (5) días, bajo el apercibimiento previsto por el art. 59 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

A tal fin notifíquese a la demandada con copia de la demanda y documental, encomendando a la parte la confección del instrumento ordenado. (arts. 41, 59, 120, 135, 498 y cctes. del CPCCN).

5) Tener presente para su oportunidad los planteos formulados.

6) Hacer saber a los letrados apoderados del Banco Piano S.A., Banco Macro S.A., Banco Galicia y Buenos Aires SAU, HSBC Bank Argentina S.A., Banco BBVA Argentina S.A., que deberán verificar e informar su registración dentro del SAU, a efectos de validar sus domicilios electrónicos dentro de estas actuaciones. En caso de hallarse inscriptos, deberán informar sus respectivos números de CUIT de modo de habilitar los correspondientes registros.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

Protocolizado en el Registro Único de Sentencias 'Materias Civiles Aco 6/14'
Conste.



#38988939#417855053#20240701111544345